

La doble crisis de seguridad de América Latina

A veces se pueden sentir por anticipado los movimientos tectónicos del escenario internacional; pero eso no quiere decir que el terremoto pueda evitarse.

Prever una crisis no equivale a poder evitarla. La historia está llena de ejemplos de cómo líderes políticos y militares han dado señales de entender que una tormenta de grandes proporciones se estaba formando en torno a ellos, pero han sido incapaces de contenerla. Sin duda, la segunda guerra mundial fue el desenlace anunciado de una espiral de tensión alimentada por el expansionismo de fascistas italianos y nazis alemanes; no obstante, las democracias europeas vieron cómo sus diplomáticos no pudieron desactivar la crisis y sus militares fracasaron en su intento de disuadir el lanzamiento de un ataque no provocado. Mucho más tarde, a partir de mediados de la década de los ochenta, las cancillerías occidentales comenzaron a concientizarse de que la Federación Yugoslava caminaba hacia su desintegración. Sin embargo, ni Estados Unidos ni sus socios europeos pudieron frenar la escalada de conflictos étnicos que condujeron al estallido de las guerras balcánicas en los noventa y a una sangría que duró casi una década. En otras palabras, a veces se pueden sentir por anticipado los movimientos tectónicos del escenario internacional, pero eso no significa que el terremoto pueda evitarse.

CAMBIOS EN EL ORDEN CONTINENTAL

Algo así parece estar sucediendo en América Latina. Dos tendencias de distinta naturaleza están erosionando la estabilidad

del continente. Por un lado, un recrudecimiento de las tensiones estratégicas entre los países de la región, alimentado por la política exterior revolucionaria de la Venezuela de Hugo Chávez, y el repliegue estratégico de Estados Unidos. Y por otra parte, el crecimiento exponencial de las amenazas transnacionales encarnadas en el crimen organizado y el terrorismo, que están demostrando una extraordinaria capacidad desestabilizadora desde México hasta Perú. Ninguna de estas tendencias es completamente nueva. El cambio en las reglas del juego estratégico entre las capitales latinoamericanas podría remontarse a una década atrás, cuando Hugo Chávez conquistó la presidencia de Venezuela enarbolando una agenda que incluía como punto principal la expansión de su proyecto ideológico a todo el continente. De igual manera, se puede decir que las democracias latinoamericanas han pasado décadas luchando con mejor o peor fortuna contra terroristas y narcotraficantes, pero la actual debacle financiera promete agravar sustancialmente este escenario.

De hecho, una economía en recesión reducirá la capacidad de Estados Unidos para contribuir de modo efectivo a apaciguar los conflictos en la región, al tiempo que estimulará los reflejos nacionalistas de los gobiernos, haciendo más probable el estallido de crisis regionales. Paralelamente, la recesión expulsará a un número creciente de individuos del sistema productivo —desde exmiembros de

las fuerzas de seguridad, hasta campesinos—, listos para engrosar las filas de las pujantes economías ilícitas, mientras que se recortan los presupuestos estatales destinados a la lucha contra el crimen. El resultado de estos factores combinados será un doble choque sobre la estabilidad del continente. Las democracias latinoamericanas, con un volumen menguante de recursos, tendrán que proteger a sus ciudadanos contra la creciente amenaza del narcotráfico y el terrorismo, a la vez que se ven obligadas a fortalecer sus dispositivos de defensa exterior para responder a un entorno internacional hostil.



De este modo, la región se enfrentará a un desafío estratégico de grandes proporciones.

En buena medida, el renacimiento de las tensiones entre los estados latinoamericanos está asociado con el cambio en la estructura estratégica del continente a consecuencia del repliegue estadounidense. Una de las escasas reglas fijas de la geopolítica es la capacidad de las grandes potencias para hacer que los espacios estratégicos giren en torno a ellas, forzando a los estados menores a abandonar sus rivalidades mutuas para invertir todas sus energías en la gestión de las relaciones con el poder predominante de la región. Eso fue exactamente lo que sucedió en América Latina a medida que se afirmó la influencia estadounidense desde mediados del siglo XX. Los gobiernos de la región relegaron a un segundo plano las querellas que los habían dividido durante el siglo XIX –Argentina contra Brasil y Chile, Chile contra Bolivia y Perú, etc.–, para centrar sus esfuerzos en diseñar estrategias destinadas a gestionar sus relaciones con Estados Unidos. De hecho, el discurso a favor de la unidad latinoamericana estuvo alimentado en gran medida por la necesidad de adoptar posiciones comunes frente al actor más

El resultado inmediato de estas tendencias será un declive de la influencia estadounidense en la región y la apertura de un espacio creciente para que las políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos se nacionalicen, se diferencien y se enfrenten.

poderoso del continente. El resultado fue un período relativamente pacífico entre los países de la región, libre de grandes conflagraciones como la guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, o la guerra del Pacífico, donde Chile combatió contra Bolivia y Perú.

INGREDIENTES DEL CAMBIO

Distintos factores conspiran para que este orden continental cambie sustancialmente. Por un lado, Washington presenta todos los síntomas de estar extenuado bajo el peso de las guerras de Iraq y Afganistán, que ahora parecen difícilmente soportables en el contexto de la presente recesión económica. Por otra parte, un número de actores extrarregionales están dando señales de querer competir por ganar influencia en el hemisferio. Rusia, China e Irán están multiplicando sus proyectos económicos y militares en la región, como una forma de convertirse en un polo de atracción alternativo a Estados Unidos. El resultado inmediato de estas tendencias será un declive de la influencia estadounidense en la región y la apertura de un espacio creciente para que las políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos se nacionalicen, se diferencien y se enfrenten. La historia de las relaciones internacionales ha demostrado una y otra vez que un escenario con más jugadores movidos por intereses diversos es una fórmula segura para más inestabilidad y conflicto. De hecho, para imaginar el futuro, basta con recordar cómo el repliegue norteamericano de América Latina durante la administración Carter, a finales de los setenta, desencadenó una lista de crisis que incluyó desde

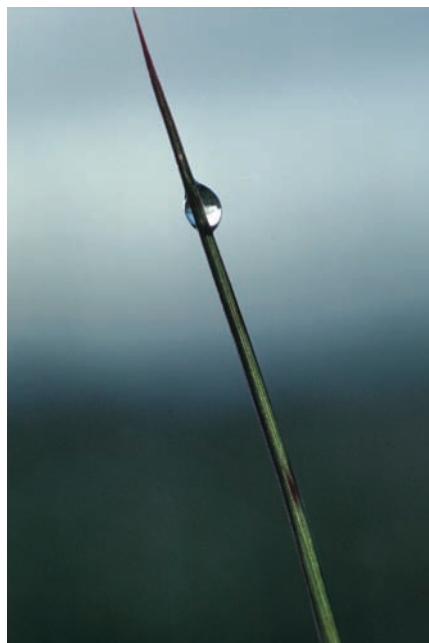
las tensiones chileno-peruanas de 1976 hasta la guerra de las Malvinas en 1982.

El problema es que ahora hay un ingrediente nuevo: una fractura ideológica entre los países que mantienen su confianza en la democracia y el mercado como vías de desarrollo, y aquellos que han optado por una combinación de autoritarismo político y estatización de la economía bautizada como socialismo del siglo XXI. Evidentemente, este grado de diversidad ideológica promete ampliar las contradicciones entre las políticas exteriores de los países latinoamericanos, haciendo más duraderos y profundos los conflictos. En realidad, si exceptuamos las aspiraciones revolucionarias cubanas seguidas con entusiasmo por el sandinismo nicaraguense durante los años ochenta, lo cierto es que tradicionalmente el comportamiento internacional de las repúblicas latinoamericanas ha sido muy homogéneo. Durante décadas, las capitales de la región mantuvieron su adhesión a ciertas normas básicas, como la no injerencia en los asuntos internos de los vecinos, y únicamente apostaron por modificaciones menores del *statu quo*. Todo eso ha cambiado desde que el presidente Chávez ha desplegado su nueva política exterior revolucionaria, orientada a construir alianzas regionales con aquellos gobiernos ideológicamente cercanos mientras acrecienta la presión sobre los países que se resisten a aceptar el proyecto bolivariano. Esta confrontación ya ha dejado su primer cadáver estratégico: la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Este organismo ha quedado prácticamente disuelto después del retiro venezolano y las pretensiones bolivianas y ecuatorianas de que las negociaciones



de libre comercio con la Unión Europea se sometan a los principios del socialismo del siglo XXI". De este modo, la presente brecha ideológica dibujará una nueva red de alianzas y antagonismos en el continente, de acuerdo con la afinidad o distancia respecto al programa revolucionario impulsado por el régimen venezolano. En consecuencia, el futuro podría parecerse a la crisis entre Bogotá y el eje Caracas-Quito-Managua, desatada a raíz de la destrucción por las fuerzas militares colombianas del campamento en suelo ecuatoriano del líder de las Farc, Raúl Reyes, y la aparición de pruebas de las conexiones de los gobiernos Chávez y Correa con el grupo guerrillero.

El segundo choque contra la estabilidad de América Latina viene de la creciente incapacidad de los gobiernos de la región para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el terrorismo. En gran medida, el origen de esta vulnerabilidad se encuentra en la ampliación de las capacidades operativas de criminales y terroristas. Ahora, por ejemplo, la cocaína llega a los consumidores estadounidenses a bordo de embarcaciones semisumergibles, capaces de cruzar centenares de kilómetros invisibles al radar con hasta ocho toneladas de narcóticos. Entretanto, las Farc hace tiempo que dejaron de ser un grupo armado formado por campesinos inspirados en el concepto maoísta de guerra popular prolongada, para convertirse en una organización terrorista moderna y globalizada. No sólo intenta construir una red continental de grupos revolucionarios afines cuyo funcionamiento parece directamente inspirado en el modelo de Al Qaeda, sino que además se ha involucrado en el contrabando de material nuclear a una escala que pocos grupos criminales pueden emular. Pero, además, la amenaza también llega del exterior. Los indicios de presencia de estructuras asociadas a Hezbollah y otras organizaciones terroristas islamistas se han multiplicado a lo largo del hemisferio. América Latina ha dejado de ser un islote estratégico. Como antes Europa o África, se ha convertido en teatro secundario de una guerra global que tiene su



epicentro en lugares tan alejados como Líbano, Yemen o Pakistán.

Cabe anotar, además, que el crecimiento de las amenazas transnacionales es también el producto de dos décadas de políticas de seguridad equivocadas por parte de un buen número de gobiernos de la región. Hoy, muchos estados latinoamericanos pagan las consecuencias de haber optado por mantener aparatos policiales y militares frágiles, en la creencia absurda de que existe alguna contradicción irresoluble entre eficacia en el mantenimiento de la ley y respeto a los derechos humanos. A lo largo de los años noventa, muchos gobiernos se guiaron por la convicción de que la forma más fácil de asegurar la democracia no era modernizar las fuerzas armadas para que ocupasen el lugar que les corresponde en un Estado de derecho, sino más bien desmantelarlas paulatinamente hasta reducir las a su mínima expresión. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los aparatos policiales estuvo lastrado por una combinación de presupuestos raquíuticos y creencias falaces, como aquella de que sólo los cuerpos de seguridad descentralizados son en verdad democráticos. Los resultados de estas políticas erradas se pueden ver en todo el continente. Fuerzas armadas como las

peruanas y argentinas con sus estructuras operativas prácticamente desmanteladas y aparatos de policía como el mexicano o el brasileño lastrados por la ineficacia y la corrupción. En resumen, estados que carecen de las herramientas para garantizar la protección de sus sociedades. Pero, adicionalmente, las cosas se pondrán peor a medida que la crisis pase cuenta de cobro y los recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la defensa del orden se reduzcan más y más.

Entonces, ¿qué clase de futuro les espera a las democracias de la región? Desde luego, nada fácil. Cualquiera de las dos crisis señaladas —el crecimiento de las tensiones regionales y la expansión del crimen organizado— representaría un enorme desafío por sí solas. Juntas pueden llegar a ser inmanejables. Para empezar, las rivalidades estratégicas entre los estados frustrarán las posibilidades de cooperación para enfrentar actores transnacionales como el narcotráfico. Ahí está, como botón de muestra, la falta de voluntad de Quito para resolver las diferencias con Bogotá con el fin de articular una colaboración antinarcóticos efectiva. Al mismo tiempo, el peligro latente de amenazas no estatales como el terrorismo, con los antagonismos ideológicos entre los gobiernos latinoamericanos, promete generar un escenario volátil, donde las crisis tenderán a ser más graves y profundas. De hecho, la forma en que la conexión venezolana con las Farc ha deteriorado las relaciones entre Caracas y Bogotá es un buen ejemplo de esta tendencia. La consecuencia será un continente más inestable donde las democracias tendrán que cerrar filas para sobrevivir al doble desafío estratégico del proyecto autoritario etiquetado como socialismo del siglo XXI, y al caos alimentado por terroristas y criminales. Durante décadas, América Latina pudo enorgullecerse de ser una región relativamente pacífica, en comparación con las historias sangrientas de Oriente Medio o Europa. Las fuerzas que están reconfigurando los equilibrios estratégicos del continente amenazan con terminar con esta reputación. **P**